

•THELMA MEJÍA

EL DIFÍCIL COMPROMISO DE LA DEUDA SOCIAL

Concebida únicamente como una especie de «asistencialismo estatal», la deuda social para el gobierno hondureño se traduce sólo en acciones vinculadas a la entrega de bonos y alimentos por trabajo en las zonas más apremiantes del país, según se desprende de un informe oficial. Mientras tanto, la población en situación de indigencia, llega al 54,5% de los hogares.

Denominado «Pobreza y Política Social», emitido por la Secretaría Técnica de Cooperación, el informe sostiene que el país necesita trascender del «asistencialismo» promoviendo oportunidades reales de desarrollo a quienes se encuentran en situación de desventaja social por su condición de pobreza.

Guillermo Molina, ministro de Cooperación, es del criterio que Honduras enfrenta el desafío de llevar adelante una «política social que permita superar el problema de la pobreza y dar mejores oportunidades de vida a la población».

De allí que insista en la necesidad de un crecimiento económico con equidad que combine la generación de empleos productivos con mejores salarios, un aumento en la inversión y políticas sociales destinadas a integrar a los sectores marginados.

Su preocupación radica en que de acuerdo al informe elaborado por esa Secretaría Técnica de Cooperación, el porcentaje de familias por debajo de la línea de la pobreza alcanza en el país al 75,6% de la población, que representan 81% de la población total estimada en 5,8 millones de personas.

A su vez, la población en situación de indigencia llega al 54,5% de los hogares, afectando al 61,9% del total de habitantes, en tanto que apenas el 24,4% de los hogares caen en el nivel de «no pobres».

La zona rural del país sigue siendo la que concentra los índices más altos de pobreza, especialmente en la región de occidente, donde habitan gran parte de los pueblos indígenas, y según el informe oficial, 96% de los hogares en esa región están bajo la línea de la pobreza.

Le siguen en importancia, la región sur del país, especialmente los departamentos de Choluteca y Valle, donde 78% de sus habitantes, estimados en un poco más de 300 mil personas, viven bajo la línea de pobreza.

Si bien el país adquirió durante la Cumbre Social de Copenhague, compromisos vinculados a frenar el avance de la pobreza y mejorar las condiciones sociales y humanas de sus pobladores, estos no han podido ejecutarse a cabalidad debido a los procesos de ajuste económico iniciados en 1990.

Nelson Avila, consultor hondureño en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que sin duda las políticas de ajuste económico, «sorprendieron a los hondureños sin defensas y el resultado es que hoy tenemos una mayor cantidad de pobres, mayor índice de desempleo y poca actividad en materia social porque se carece de un proyecto integral de país».

Avila es del criterio que los gobiernos deben adoptar un modelo de economía solidaria, donde se le dé una amplia participación a los sectores sociales en el desarrollo del país, en aras de garantizar un verdadero crecimiento económico sostenido.

A su juicio, de qué sirve que el gobierno diseñe programas sociales «paliativos» a los ajustes económicos, cuando «*estos no llegan a toda la población y se puede caer en el riesgo del paternalismo, algo que lejos de ayudarnos nos hace daño porque nos acomoda a esquemas de dependencia.*»

«*Pienso que sólo un modelo de economía solidaria es la base real para combatir la pobreza en Honduras si queremos entrar con nuevos brillos de cara al nuevo siglo y nos dedicamos a dejar de perder el tiempo como hasta ahora,*», enfatizó.

La situación social del país, en materia de pobreza e inseguridad ciudadana, es uno de los problemas que más han analizado diversos organismos sociales, especialmente los grupos de derechos humanos, que ven en la miseria una especie de «bomba de tiempo» a punto de estallar.

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) hizo público a mediados de este año una propuesta denominada «Modelo Alternativo de Desarrollo» con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales.

Su propuesta, concertada con varios sectores de la sociedad civil, indica que el llamado «rostro humano» de los ajustes económicos prometidos por el gobierno del presidente hondureño, Carlos Reina, fracasó porque centro sus acciones en reducir el déficit fiscal y el pago al servicio de la deuda externa.

De acuerdo a la propuesta elaborada por el CODEH, sólo en 1995 el gobierno destinó al servicio de la deuda 35% de sus ingresos, en 1996 el 41%, y para 1997 el 42%, equivalentes a

unos 700 millones de dólares de los 1.200 millones que anualmente exporta este país.

Además –agrega– la extrema polarización social que vive el país confirma que del resto del ingreso que no se utiliza para el pago de la deuda externa, un 80% de la población recibe 35,5%, y un 20% de la población restante el 67,5%.

Según Ramón Custodio, presidente del CODEH, en 1995 el costo básico para cubrir la canasta familiar para un hogar integrado por cinco personas, era de 256,90 dólares mensuales, una cifra que supera los 60 y 136 dólares mensuales que ganan los campesinos y profesionales en este país.

En este sentido, propone una «reorientación» de las actuales políticas económicas y sociales donde la sociedad civil tenga una participación más activa en aras de *«detectar imposiciones foráneas nada acordes con nuestro sistema y forma de vida»*.

La propuesta del grupo humanitario es hasta ahora el esfuerzo más sólido y sustantivo que en los últimos cinco años ha elaborado la sociedad civil, quien poco a poco va adquiriendo un mayor protagonismo en demanda de sus derechos políticos, sociales y culturales.

Para el analista Víctor Meza, el problema de la deuda social en Honduras está muy vinculado al desarrollo democrático de este país, caracterizado por un divorcio entre la agenda política y la social. La pobreza es uno de los principales desafíos de Honduras a las puertas de un nuevo siglo, donde *«nuestros gobernantes, desgraciadamente no entienden aún la necesidad de diseñar una verdadera plataforma de desarrollo que supere el discurso retórico, casi lírico, por uno práctico, palpable y concreto»*.

- IPS Informe especial para Control Ciudadano.